

INE/CG468/2016

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “PARA MEJORAR VERACRUZ” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA, ALTERNATIVA VERACRUZANA Y CARDENISTA DE MÉXICO, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2015-2016, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/55/2016/VER

Ciudad de México, 15 de junio de dos mil dieciséis.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/55/2016/VER**.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja. El primero de junio de dos mil dieciséis, se presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja signado por el Lic. Lauro Hugo López Zumaya, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Órgano Público Electoral Local Veracruz, en contra de la Coalición “Para Mejorar Veracruz”, integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana y Cardenista de México); por hechos que pudieran contravenir la normatividad electoral en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, en el estado de Veracruz; lo anterior a efecto que esta autoridad fiscalizadora, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo que en derecho procediera.

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja.

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/55/2016/VER**

I. El nueve de noviembre del año dos mil quince, dio inicio el Proceso Electoral Local Veracruz, 2015-2016, para renovar Gobernador del Estado de Veracruz e Integrantes del Poder Legislativo del Estado de Veracruz.

II. Con fecha 15 de mayo de 2016, el que suscribe nos hicieron del conocimiento que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), destinara a pequeños productores agrícolas, ganaderos y pesqueros, se les hará entrega de un apoyo para estos rubros, dicho apoyo proviene de la misma Secretaría a través de su Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario en los Estados (FOFAE), dicho proyecto está conformado también por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SEDARPA). Siendo un (sic) participación tripartita entre dichas secretaria federal y estatal, con el gobierno federal.

III. Posteriormente a lo anterior, SAGARPA entrega un recurso SEDARPA ambas dependencias Federales y Estatales, se harán a través de sus Fideicomisos, los cuales pidieron la retención de los apoyos, con el objetivo de hacer desvíos de recursos para poderlos aplicar a la campaña de Héctor Yunes Landa, candidato de la Coalición “para Mejorar Veracruz”.

*IV. Razón de lo anterior, **se tienen el temor fundado** que se haga **mal manejo de los recursos federales**, y que dichas dependencias hagan una cortina de humo con el objetivo de **aplicar los recursos a la campaña** antes citada, por esa razón es que vengo por medio del presente ocurso para que se hagan las investigaciones pertinentes, ya que en configurarse mi dicho se estará incurriendo hasta en un delito federal”.*

[Énfasis añadido].

Por lo que respecta a los elementos probatorios, la parte quejosa no ofreció ni aportó probanza alguna.

III. Acuerdo de recepción y reserva de admisión. El primero de junio de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja antes referido. En esa misma fecha se acordó integrar el expediente respectivo, que se le asignara el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/55/2016/VER**, que se registrara en el libro de gobierno y se notificara de ello al Secretario del

Consejo General del Instituto, reservándose la admisión para el caso de que resultara procedente.

IV. Notificación al Secretario del Consejo General. El dos de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/14753/2016, esta Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la recepción del procedimiento de mérito.

V. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la décima octava sesión extraordinaria celebrada el diez de junio de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los presentes: la Consejera Electoral Beatriz Eugenia Galindo Centeno y los Consejeros Electorales Benito Nacif Hernández; Javier Santiago Castillo y del Consejero Electoral y Presidente de la Comisión, Ciro Murayama Rendón; en ausencia del Consejero Electoral Enrique Andrade González.

Una vez sentado lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Así pues, cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia.

De la lectura preliminar al escrito de queja, la autoridad electoral fiscalizadora advirtió que no cumplía con los requisitos previstos en el artículo 29, numeral 1, fracción III, con relación al 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dichos preceptos señalan que:

“Artículo 29.

1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los requisitos siguientes:

(...)

III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o denuncia.

(...)”.

“Artículo 31.

1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, atendiendo a los casos siguientes:

I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención a la parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29, numeral 1, fracciones I o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 del Reglamento.

(...)”.

[Énfasis añadido]

En este orden de ideas, la normatividad señalada advierte lo siguiente:

- Toda queja deber ser presentada por escrito, y dentro de los requisitos que debe cumplir, es la narración expresa y clara de los hechos en los que se base.
- Que en caso de no observarse en el escrito de queja la narración expresa y clara de los hechos en los que se base esta, la autoridad electoral, sin que medie prevención, podrá desechar de plano el escrito presentado por el quejoso.
- En caso de darse el supuesto mencionado en el punto anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión de Fiscalización el proyecto de resolución que deseche el procedimiento.

Lo anterior es así, ya que la narración clara y expresa de los hechos denunciados así como las circunstancias de modo de tiempo, modo y lugar, son base del inicio de la investigación que debe llevar a cabo la autoridad, y en su caso de faltar estos, se genera un obstáculo para que se pueda trazar una línea de

investigación, lo cual imposibilita a la autoridad para poder realizar diligencias, toda vez que dicha omisión no le permite saber cuáles son los hechos denunciados y, consecuentemente, acreditar o desmentir los mismos, es decir, las circunstancias del caso concreto, determinar el contexto en que se llevó a cabo la conducta denunciada y adquieren relevancia para que en cada caso, se dilucide si existió o no infracción a la normatividad electoral.

En otras palabras, si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes aún con carácter indiciario, que presupongan la veracidad de los hechos denunciados, los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus facultades a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos.

En atención a lo anterior, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe desechar la queja identificada con el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/55/2016/VER**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esto es, si el escrito de queja contiene una narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja, y para el caso de no cumplir con dicho requisito, se deberá desechar.

Al respecto, Rafael de Pina y José Castillo Larrañaga señalan que *“la claridad consiste en que pueda entenderse exactamente la exposición y si el hecho sobre el que estriba la demanda es compuesto, es necesario expresarlos todos por el orden cronológico en que ocurrieron. La precisión contribuye a la claridad, al eludir las disertaciones inútiles y las palabras contrarias a la sencillez, sin que ello implique laconismo”*.¹

En ese sentido, la quejosa, en su escrito, realizó las siguientes manifestaciones:

*“Se les denuncia los hechos sobre el origen, monto y aplicación y destino (sic) de los recursos derivados del financiamiento de personas obligados por el Reglamento de Fiscalización, como el **temor fundado** que se haga mal manejo y aplicación de los recursos de los programas federales destinados a los pequeños productores Agrícolas, Ganaderos y Pesqueros, operados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGARPA), los cuales se piensa destinar a la campaña del candidato Héctor Yunes Landa, al cargo de*

¹ Rafael de Pina y José Larrañaga, *Instituciones de Derecho Procesal Civil*, séptima edición, Porrúa, México, 1966, p. 355.

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/55/2016/VER**

Gobernador de Veracruz de la Coalición “Para Mejorar Veracruz” (Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde de México, Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana y Cardenista De México). Por tanto, con el objetivo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través de su Comisión de Fiscalización o la misma Unidad Técnica de Fiscalización, cumpla con las atribuciones conferidas por el artículo 41 apartado “B” penúltimo párrafo y último párrafo, pido se interrumpa en el secreto bancario y se congelen las cuentas bancarias de dichos Fideicomisos donde se encuentran los recursos federales antes señalados, y que estos lleguen realmente a los programas sociales para que fueron destinados y no se ejecute un desvío de dichos recursos”.

De la lectura del escrito de queja, sólo se desprenden manifestaciones unilaterales que no aportan elementos a la autoridad, si quiera de carácter indiciario que permitan tener un conocimiento claro y preciso de los hechos que pretende el quejoso se investiguen.

Ello es así puesto que manifiesta que los recursos de programas federales destinados a los pequeños productos Agrícolas, Ganaderos y Pesqueros, operados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGARPA), se destinen para apoyar la candidatura de Héctor Yunes Landa al cargo de Gobernador de Veracruz de la Coalición “Para Mejorar Veracruz”, pero no exhibe un solo elemento que confirme su dicho.

Más aún, sólo expresa “temor fundado”, es decir, no describe hecho alguno sino expone la presencia de miedo ante la presunción del uso de recursos públicos a favor de la campaña que denuncia. Respecto a los hechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que por *“hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo”*.²

En la especie, del escrito de queja no se desprende una narración expresa y clara de los hechos, elemento indispensable para que esta autoridad investigue lo relativo a origen, manejo y destino de los recursos, en ejercicio de su competencia. En realidad, no existe una narración de hechos pues el quejoso no

² Tesis de Jurisprudencia P./J. 74/2006 <http://200.38.163.178/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx> “Hechos Notorios. Conceptos General y Jurídico.

describe acontecimientos, sino el miedo frente al mal uso de recursos públicos que presume sucederá. Ello explica tanto la omisión de expresar circunstancias de modo, tiempo y lugar en tanto los hechos no han tenido lugar como la de no aportar ni ofrecer, aún con carácter indiciario, pruebas que sustenten sus manifestaciones.

Así las cosas, del escrito de queja no hay un solo elemento que acredite la existencia de hechos infractores de la normatividad electoral en materia de fiscalización, lo cual se traduce en un obstáculo para que la autoridad pudiese trazar una línea de investigación, que le permita realizar diligencias encaminadas a acreditar la veracidad de los hechos denunciados o desmentirlos, máxime que en el caso en concreto no se cuenta con ningún elemento de prueba.

Sirven como sustento de lo anterior, las tesis emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra rezan:

“Procedimiento administrativo sancionador. El denunciante debe exponer los hechos que estima constitutivos de infracción legal y aportar elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza su facultad investigadora.- Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, ***en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución.*** Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.

Cuarta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Claudia Pastor Badilla.

Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—10 de septiembre de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: David Cienfuegos Salgado.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-502/2009.—Actor: Sergio Iván García Badillo.—Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.—3 de julio de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constanco Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.”

[Énfasis añadido]

“Quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas. Requisitos de la admisión de denuncia.- Los artículos 4.1 y 6.2³ del Reglamento que Establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Sustanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros trámites, con motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos afirmados en la denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos sancionables a través de este procedimiento; **2. Contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se proporcionen los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo ordinario en que suele dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los escenarios en que se ubique la narración,** y 3. Se aporten elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos materia de la queja. El objeto esencial de este conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, como elementos necesarios para justificar

³ **Nota:** El contenido de los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, los cuales se interpretan en esta jurisprudencia, corresponde respectivamente, con los artículos 29, numeral 1, fracción IV y 31, numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización vigente.

*que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el mandato de tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil de procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de hechos que de antemano se advierta que no son sancionables. Con el segundo, **se tiende a que los hechos narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad. De modo que cuando se denuncien hechos que por sí mismos no satisfagan esta característica, se deben respaldar con ciertos elementos probatorios que el denunciante haya podido tener a su alcance de acuerdo a las circunstancias, que auxilien a vencer la tendencia de su falta de credibilidad.** El tercer requisito fortalece a los anteriores, al sumar a la tipificación y a la verosimilitud ciertos principios de prueba que, en conjunción con otros, sean susceptibles de alcanzar el grado de probabilidad necesario para transitar a la segunda fase, que es propiamente la del procedimiento administrativo sancionador electoral. Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada, prohibida por la Constitución de la República.*

*Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido Revolucionario Institucional. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución Democrática. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución Democrática. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos.”*

[Énfasis añadido]

Así, ha quedado acreditado que la queja presentada por el Lic. Lauro Hugo López Zumaya, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Órgano Público Electoral Local Veracruz, no realiza una narración expresa y clara de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, entrelazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados ni mucho menos aporta elementos de convicción que permitan a la autoridad electoral iniciar una investigación.

En consecuencia, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 31, en relación con el artículo 29, numeral 1, fracción III del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, lo procedente es **desechar de plano** la queja interpuesta.

3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el “recursos de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidas, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **desecha de plano** la queja interpuesta por el Lic. Lauro Hugo López Zumaya, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Órgano Público Electoral Local Veracruz, en contra del C. Héctor Yunes Landa, candidato a Gobernador de Veracruz, por la Coalición “Para Mejorar Veracruz”, de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 2** de la presente Resolución.

SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/55/2016/VER**

TERCERO. Notifíquese al quejoso en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones.

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 15 de junio de dos mil dieciséis, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**